

La *intelligentsia* de derecha acosada

La *intelligentsia* de la derecha parece estar atravesando por una noche de San Bartolomé. En menos de cinco meses han sido asesinadas cuatro figuras ampliamente reputadas por su militancia anticomunista. A los asesinatos del ex comandante Miguel Castellanos, el 16 de febrero, y del Dr. Francisco Peccorini, el 15 de marzo, se han sumado en el presente mes de junio el del Ministro de la Presidencia, Dr. José Antonio Rodríguez Porth, el día 9, y el del presidente del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Edgar Chacón, el 30.

Todos estos asesinatos han ocurrido en un ambiente de extrema polarización político-militar y de exacerbado debate ideológico. En el mismo contexto ha acontecido una serie de hechos violentos dirigidos contra varias figuras prominentes del gobierno: el asesinato del Fiscal General, Dr. Roberto García Alvarado, perpetrado el 19 de abril; los atentados contra las residencias del vicepresidente Francisco Merino, el 14 de abril y del presidente de la asamblea legislativa, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, el 16 de mayo; y el asesinato del director del Cuerpo de Bomberos, coronel Roberto Armando Rivera, el 26 de junio. De todos estos atentados, sin excepción, la derecha, dentro y fuera del gobierno, ha responsabilizado al FMLN.

La verdad es que, fenoménicamente, todos estos hechos parecen revelar la mano del FMLN. Pero ni las acusaciones judiciales ni, mucho

menos, el análisis científico del proceso político, pueden desarrollarse al hilo de las apariencias. Aunque el FMLN pueda mantenerse como un hipotético responsable, no resulta la hipótesis más probable en la mayoría de esos casos. Sólo en las muertes de Miguel Castellanos y del coronel Rivera, hubo reivindicación explícita del FMLN. Sin embargo, incluso el asesinato de Castellanos resulta ambiguo. Sobre él pesaba la amenaza de muerte del FMLN por su carácter de "traidor," de modo que cuando fue asesinado, el Frente se reivindicó inmediatamente su muerte a través de Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos. Con todo, cuando la red de comandos urbanos procedió a rendir sus respectivos informes periódicos a la comandancia general, ningún comando se responsabilizó del hecho. Ello dio pie a la comandancia general para sospechar que, pese a las apariencias, Castellanos no fue ejecutado por sus unidades. Del resto de casos, el FMLN ha desmentido su participación en los atentados contra las residencias de Merino y de Alvarenga Valdivieso, y en los asesinatos de Rodríguez Porth y de Edgar Chacón. Guardó silencio sobre los asesinatos de Peccorini y del fiscal.

Los desmentidos explícitos del FMLN, en aquellos casos en que los ha habido, no garantizan apodícticamente que sus comandos no hayan sido los responsables, pero constituyen un elemento que debiera ser sopesado en lo que vale. El *factum brutum* del cual habría que partir es que

cuando el FMLN realiza una acción, suele reivindicársela, independientemente del desprestigio político que objetivamente le pueda acarrear. El FMLN ha asesinado alcaldes y ha colocado coches-bombas, pero se ha responsabilizado de ello. En el caso de los coches-bombas, ha reconocido incluso que se trata de una práctica que reportó más daños a la población civil que ventajas militares. En las últimas semanas, se ha responsabilizado del atentado contra el microbús de pasajeros que circulaba de Santa Ana a San Pablo Tacachico el 22 de mayo, y del ametrallamiento de la columna de vehículos particulares que regresaba de la playa hacia San Salvador el domingo 2 de julio. Asimismo, se reivindicó el asesinato del coronel Rivera. Si se ha responsabilizado de todos estos hechos, no hay motivos razonables para pensar que no quisiera hacerlo respecto de los otros atentados que se le achacan, si efectivamente sus comandos los hubiesen ejecutado.

¿Quién, pues, ha ejecutado los hechos de los cuales el FMLN no se ha responsabilizado? Una respuesta mínimamente ponderada debe empezar por evitar meter en el mismo saco todos esos incidentes de los cuales la derecha ha culpado tan apriorísticamente al FMLN.

El asesinato del ex comandante Castellanos parecía bastante claro, hasta que la propia comandancia guerrillera entró en dudas al respecto. Como director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), integrado por otros ex comandantes guerrilleros, Castellanos desarrollaba una intensa actividad analítica y propagandística contra el FMLN. Además de ello, el FMLN lo tenía sentenciado a muerte por ser "responsable de varios asesinatos y crímenes en contra de miembros del movimiento popular." Si la posición última del FMLN es que, después de todo, sus unidades no lo eliminaron, cabría quizá pensar que lo hubiese hecho algún comando urbano radicalizado y relativamente autónomo frente a las orientaciones generales de la comandancia general. En tal caso, ese mismo grupo podría ser el responsable de los atentados contra el director y el jefe de redacción de la revista

Análisis, vertebrada en torno a los trabajos interpretativos del CEREN.

El caso del Dr. Peccorini parece bastante menos claro, aun cuando sus virulentos ataques al FMLN y su pertenencia al Comité Pro Rescate de la Universidad de El Salvador (UES) indudablemente le concitaron el resentimiento de algún sector fanatizado de la izquierda. Probablemente tampoco haya que desligar su muerte de los dos atentados sufridos por el Lic. Rafael Antonio Méndez, cabecilla principal del Comité Pro Rescate. Nuevamente, sin embargo, no hay base suficiente para asegurar que el FMLN, mucho menos que las autoridades de la Universidad de El Salvador, tengan responsabilidad ni en los atentados contra Méndez ni en el asesinato de Peccorini, pero tampoco puede descartarse la hipótesis de que algún comando urbano radicalizado y autónomo estuviese de por medio.

En el caso del fiscal hay todavía menos razones objetivas para sospechar del FMLN y más para dirigir las investigaciones en otra dirección. En concreto, no sería en modo alguno extraño que su asesinato hubiese sido obra del grupo de gangsters vinculados a la banda de secuestradores encabezada por el teniente Isidro López Sibrián, el empresario Orlando Llovera Ballette, el mayor José Alfredo Jiménez, el ganadero Antonio Cornejo Arango, el teniente coronel Joaquín Zacapa y el teniente Carlos Zacapa, todos ellos correligionarios o por lo menos simpatizantes de ARENA e incluso amigos personales del mayor D'Aubuisson.

Como se sabe, los dos oficiales Zacapa y el ganadero Cornejo se encuentran prófugos desde marzo de 1986. A ellos se sumó, a principios de abril, el empresario Llovera Ballette, aprovechando el dictamen del ex juez Larios que declaró libre a la banda. Sólo quedarían bajo arresto el teniente López Sibrián y el mayor Jiménez. Estos estarían particularmente resentidos contra ARENA, por haber sido abandonados a su suerte en la hora difícil de su reclusión penal.

Si se considera la enérgica postura del fiscal ante el *affaire* Larios —según aseguran quienes lo

conocían de cerca, el Dr. García Alvarado era un hombre probo que estaba decidido a llevar la aplicación de la justicia hasta sus últimas consecuencias en el caso de los secuestros— parece aún más verosímil que la banda haya tenido que ver en su asesinato, habida cuenta de los escabrosos *curricula* de sus integrantes, sobre todo de López Sibrián, implicado también en el asesinato de los asesores norteamericanos en el Sheraton en 1981. En apoyo de tal hipótesis, cabe recordar también la muerte del Juez Primero de Primera Instancia Militar, Dr. Jorge Alberto Serrano, asesinado el 11 de mayo de 1988, luego de denegar la amnistía solicitada por el abogado defensor de los secuestradores. En virtud de todo esto, es tan oscura la muerte del fiscal, que el propio presidente Cristiani hubo de admitir posteriormente que su asesinato podría haber sido ejecutado por “otros grupos” distintos del FMLN.

Los atentados contra las residencias del vicepresidente Merino y del Lic. Alvarenga Valdivieso tampoco aportan pruebas contundentes sobre la participación del FMLN, sobre todo

cuando, como en el caso de Merino, unas autodenominadas “Fuerzas Cívicas Gerardo Barrios” se reivindicaron la autoría del ataque. El carácter confesadamente anticomunista y pro-Fuerza Armada de las mismas podría ser un indicio cuya pista habría que seguir con más cuidado. Es cierto que el FMLN ha prometido intensificar su estrategia de desestabilización para presionar al gobierno de Cristiani a negociar. Pero de ello no se sigue que todo acto de terrorismo que ocurra en el país sea responsabilidad suya. Aunque así fuera, lo menos que puede señalársele a ARENA es que el responder con la ley del Talión a esas provocaciones no es la mejor manera de evitar que el país entero se despeñe en el abismo de la violencia irracional y del completo descoyuntamiento social.

Mutatis mutandis, lo propio habría que decir del asesinato del Dr. Rodríguez Porth. Sus credenciales como jurisperito, académico, político, polemista e ideólogo empresarial han sido ampliamente difundidas por la prensa. Fundador de ARENA y director asesor del Consejo



Ejecutivo Nacional (COENA) de dicho partido, así como miembro del consejo asesor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Rodríguez Porth abandonó este último cargo a finales de mayo, para asumir el Ministerio de la Presidencia que le ofreció el presidente Cristiani.

En los inicios de su trayectoria de hombre público, el Dr. Rodríguez Porth se desempeñó como secretario de la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) en 1938 y 1939 y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Asimismo, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y Justicia durante los mandatos de los generales Andrés Ignacio Menéndez y Salvador Castaneda Castro. Posteriormente, fue diputado a la asamblea legislativa en 1947 y 1948, miembro del directorio cívico-militar surgido del golpe de Estado de enero de 1961, candidato presidencial del Partido Popular Salvadoreño en las elecciones de 1972, miembro de la comisión técnica de la cancillería entre 1973 y 1979, ministro de relaciones exteriores durante el último período del coronel Molina y durante el gobierno del general Romero, y diputado suplente de ARENA por San Salvador a partir de las elecciones de marzo de 1988.

De modo particular, durante el período presidencial del Ing. Duarte, Rodríguez Porth apareció siempre a la cabeza de todas las batallas decisivas libradas por el gran capital contra lo que estimaba como injerencismo estatal en la esfera privada. Quizá la más importante la libró con ocasión de la promulgación del impuesto para la defensa de la soberanía nacional, decretado por el gobierno demócrata cristiano a finales de 1986. El Dr. Rodríguez Porth tenía una amplia experiencia en este terreno, tras haber peleado en 1969, como miembro de la Federación de Asociaciones de Abogados, contra las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es comprensible que el asesinato de una figura como la suya haya desatado el cúmulo de indignación que de hecho suscitó en los más

diversos sectores sociales y políticos del país. En su condena del crimen, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" reprobó el hecho como "antipatriótico, al dificultar con él las posibilidades de un arreglo político y democrático al conflicto, de una despolarización social y de un desescalamiento de la violencia;" y subrayó que el asesinato del Dr. Rodríguez Porth "se constituye por sus especiales circunstancias en una acción contra todo el pueblo de El Salvador." Por su parte, el rector de la Universidad de El Salvador, Lic. Luis Argueta Antillón, recordó que el *Alma mater* "siempre ha sostenido que las ideas se combaten con ideas y como universidad humanista consideramos que el respeto a la vida de todas las personas es un derecho humano primario y fundamental que no debe ser violado por nadie." Significativamente, la inmensa mayor parte de sectores, incluidos casi todos los partidos políticos, se pronunció por una respuesta prudente, aunque firme, al asesinato. Sólo ARENA y las fachadas de la derecha esquizofrénica clamaron por una *vendetta* drástica no sólo contra el FMLN, sino contra cualesquiera personas, instituciones o sectores que manifestaran alguna simpatía por un proyecto político de izquierda.

Así, el comunicado difundido el 10 de junio por el COENA no vaciló en responsabilizar del crimen a las "hordas terroristas del FMLN-FDR," mientras que el coronel Sigifredo Ochoa Pérez deploraba que "mientras los cabecillas que planean y ordenan crímenes (¿Ungo, Zamora, Aguiñada, etc.?) transitan libre e impunemente, y hasta se dan el lujo de dar conferencias de prensa, nuestros más grandes valores son asesinados." Curiosamente, en un comunicado posterior difundido el 12 de junio (aunque fechado el día 9), además de moderar el tono de la condena, ARENA responsabilizaba sólo al FMLN, tal vez después de recapacitar sobre el despropósito de comprometer al FDR en el asesinato.

Por su parte, en sus primeras declaraciones de prensa tras el hecho, el presidente Cristiani expresó que "estamos casi totalmente convencidos de que es una acción del FMLN para tratar de

provocar reacciones de parte de nuestro gobierno." Sin embargo, en el mensaje oficial en torno al asesinato, pronunciado el mismo día, evitó responsabilizar explícitamente al FMLN. Más bien, condenó a "las fuerzas oscuras que no quieren la paz, ni la reconciliación, ni la concordia, ni el progreso de la patria" y aseguró que "no nos dejaremos provocar para que el país se hunda más en la vorágine de la violencia." Con todo, la persuasión oficial que ha prevalecido persiste en acusar al FMLN. El propio Cristiani, pese a la medida con que ha procedido frente a la escalada de terrorismo que enfrenta su gobierno,



ha externado su convicción moral de que el FMLN asesinó a su ministro. El jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, aseguró incluso que el comando que ejecutó el atentado habría sido entrenado en Nicaragua.

Antes de lanzarse a formular tales acusaciones, convendría buscar hipótesis alternativas, pues otras fuerzas políticas podrían haber estado interesadas en la eliminación del Dr. Rodríguez Porth. De hecho, la primera persona en señalar tal posibilidad fue la propia viuda del ministro, Ana María de Rodríguez Porth, quien en sus primeras declaraciones declinó culpar tajantemente al FMLN, admitiendo la probabilidad de que otro tipo de "extremas" hubiese asesinado a su esposo, en concreto, tal vez algún sector de la democracia cristiana y militares afectos a ésta.

Fuese un sector demócrata cristiano o no el asesino del Dr. Rodríguez Porth, resulta significativo que su propia viuda no se haya inclinado apriorísticamente a responsabilizar de su muerte al FMLN. No debe perderse de vista que el asesinato del Ministro de la Presidencia ha acontecido en un momento de considerables tensiones al interior de ARENA, tensiones que han derivado fundamentalmente del descontento del sector escuadronista del partido por lo que le parece ser un plegamiento de la línea de Cristiani a las directrices de Estados Unidos, y que han sido exacerbadas por el reparto de cargos gubernamentales anunciado el 1 de junio, sobre todo en lo relativo a la cúpula de la Fuerza Armada. No cabe duda que ese sector recalcitrante de la derecha tendría sobrados intereses en eliminar a un hombre como el Dr. Rodríguez Porth como una señal de advertencia a Cristiani, cuyas posiciones aquél respaldaba fielmente pese a sus vínculos biográficos con el ala extremista de la derecha, algunos de cuyos cascarones de fachada, como la Cruzada Pro Paz y Trabajo, contribuyó a fundar.

Esta disputa dentro de la derecha no es nueva. Tanto en ARENA como fuera de él, todavía subsisten a la derecha de Cristiani grupúsculos recalcitrantes que desearían retrotraer al partido a

su vieja tradición escuadronista. La expresión más reciente de este sector la constituye la misiva que, bajo el pseudónimo de "Juan Arena," envió la "vieja guardia" del partido al mayor D'Aubuisson a mediados de abril, instándolo a retomar las riendas partidarias y saldar cuentas con todos los areneros oportunistas que estarían desnaturalizando los principios ideológicos originales del partido. En tales términos, la "vieja guardia" arenera formuló sus reclamos. En la asamblea del 23 de abril, el propio D'Aubuisson respondió que quienes redactaron tal misiva "no piensan que de hace diez años para acá mucho ha cambiado," asimismo les reprochó que con tales exhortaciones le hacían un mal personal en lugar de beneficiar políticamente su figura.

Estas críticas vienen de algún tiempo atrás. Hace algunos meses, el dirigente cafetalero y presidente de la autodenominada Cámara de la Libre Empresa, Orlando de Sola, se lamentaba de la evolución sufrida por ARENA, un partido "que originalmente se autodenominaba conservador, pero parece haber caído en la trampa de convertirse en perfeccionador del socialismo" ("Arena movediza," *El Diario de Hoy*, 7 de junio de 1988). La misiva suscrita por "Juan Arena," pues, expresa el discurso ideológico de cierto grupúsculo de ultraderecha que estima que la dirigencia actual de ARENA no tiene suficientemente claros los ideales del partido o, por lo menos, no actúa consecuentemente con ellos.

Desde luego, es descabellado suponer que un empresario con la trayectoria de Cristiani pueda estar traicionando los principios de ARENA. Pero ni siquiera Cristiani está exento de toda sospecha de "socializante" para quienes consideran a Bush como colaborador del expansionismo soviético o imaginan que la CIA y la KGB complotan amistosamente para colocar a El Salvador bajo las garras del comunismo a través de la estrategia de guerra de baja intensidad. Apenas a principios de mayo recién pasado, cuando una delegación de la comisión político-diplomática del FMLN visitó New York para entrevistarse con el asistente ejecutivo del secretario general de la ONU, el Lic.

Chacón, molesto por la concesión de la visa de entrada a Estados Unidos a la delegación del FMLN, reiteró su vieja tesis de que "los comunistas norteamericanos planean el colapso de la Fuerza Armada. Quieren que el ejército dependa de sus armas para retirarles la ayuda en determinado momento... Es sólo una demagogia anticomunista, porque el mismo Bush sacrificó a los contras y a los patriotas cubanos de Bahía de Cochinos, como piensa hacerlo con las Fuerzas Armadas salvadoreñas" (*El Mundo*, 4 de mayo de 1989).

El propio Chacón cayó abatido por las balas del terrorismo el viernes 30 de junio recién pasado, sumándose a los asesinatos de otras figuras que de una u otra manera pasaban por ser los principales ideólogos de la derecha y, o analistas abiertamente críticos del FMLN y de la estrategia de contrainsurgencia de baja intensidad.

Nuevamente, la convicción subjetiva de la derecha es que Chacón fue asesinado por el FMLN. Sin embargo, a través de Radio Venceremos, el FMLN ha negado que sus comandos lo hayan asesinado y ha atribuido el hecho a "diferencias de fracciones internas de la extrema derecha, con apoyo de elementos de la CIA." A este respecto, conviene no perder de vista que, así como la viuda del Dr. Rodríguez Porth admitió la posibilidad de que otra "extrema" distinta del FMLN pudiese haber asesinado a su esposo, la propia viuda del Lic. Chacón también expresó sin ambages que acusaba "formalmente al FMLN y a la CIA" del asesinato del suyo. La viuda de Chacón aseguró incluso que "la CIA le ofrecía un sueldo de 4 mil colones para que dejara de escribir en la forma que lo hacía contra el comunismo y lo querían tener a su servicio y siempre los rechazó" (*Diario Latino*, 1 de julio de 1989).

Independientemente de ello, el asesinato del Lic. Chacón debe condenarse de la manera más enérgica, tanto en razón del absoluto menosprecio que dicha acción representa contra su "dignidad de persona humana," según lo expresó monseñor

Rivera en su homilía dominical del 2 de julio, como también por el irrespeto que tales procedimientos entrañan contra la libertad de expresión en un momento en que el proceso político salvadoreño parecía haber alcanzado avances sustanciales en esa dirección. Tal como el arzobispo añadía en su homilía: “pretender resolver los problemas de El Salvador con estos métodos es precipitar a la patria en el despeñadero de locura total.”

El Lic. Chacón no tenía la autoridad ni la experiencia de un Dr. Rodríguez Porth ni la agudeza dialéctica ni la trayectoria académica de un Dr. Peccorini. El propio Peccorini en cierta ocasión calificó de “modestos” sus análisis, aunque le parecían cargados de firmeza (*El Diario de Hoy*, 5 de octubre de 1988). Sus interpretaciones políticas eran frecuentemente alucinantes. Pero nada de ello obsta para calificar de nefando su asesinato y para exigir el castigo

adecuado para sus verdaderos victimarios.

Por lo mismo, resultan particularmente preocupantes las demandas de ciertos frentes y cruzadas que, de modo prepotente e irresponsable, exigen al presidente Cristiani medidas extremas para emprender represalias contra quienes les parecen ser simpatizantes del proyecto político del FMLN. La propia viuda de Chacón calificó de “estupidez” la postura claudicante del mandatario ante las presuntas maniobras del FMLN y de la CIA. Sin embargo, el presidente Cristiani ha reiterado una vez más que la ola de violencia que se cierne sobre el país, aun cuando procediera del FMLN, no le hará cejar en sus propósitos de buscar la paz por medios constitucionales. Afortunadamente, hasta el momento los reclamos de la derecha esquizofrénica siguen encontrando oídos sordos en el mandatario.

P. P.

